



ACTOR: [REDACTED]

DEMANDAD SECRETARÍA DEL TRANSPORTE.

AS:

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD.

MAGISTRAD JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL.

O:

SECRETARI JOSÉ GUILLERMO VIZCARRA CASILLAS.

O:

Guadalajara, Jalisco, 15 quince de diciembre de 2020 dos mil veinte.

**V I S T O S** para resolver en **Sentencia Definitiva** los autos del Juicio Administrativo cuyo número de expediente se indica al rubro, promovido por "[REDACTED]", por conducto de su socio administrador [REDACTED], en contra de la **SECRETARÍA DEL TRANSPORTE, SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**, así como de la **SECRETARÍA DE SEGURIDAD**, y;

#### R E S U L T A N D O

1. Mediante escrito presentado el 1 uno de octubre de 2020 dos mil veinte, a través de la Oficialía de Partes Común de este Tribunal, suscrito por [REDACTED], por su propio derecho interpuso Juicio en Materia Administrativa, por los motivos y conceptos que del mismo se desprendieron.

2. Por auto de 6 seis de octubre de 2020 dos mil veinte, se admitió la demanda, teniéndose como autoridades demandadas a la **SECRETARÍA DEL TRANSPORTE, SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**, así como de la **SECRETARÍA DE SEGURIDAD**; y como actos administrativos impugnados:

Respecto al vehículo con placas de circulación [REDACTED]:

- Las cédulas de notificación de infracción folios **78197900, 81242445, 85918311, 88378091, 93728289, 105816697, 113534729, 117540030, 130564469, 130564455 y 121949512.**

- El cobro de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma por los periodos de los años **2011** dos mil once, **2012** dos mil doce, **2013** dos mil trece, **2014** dos mil catorce, **2015** dos mil quince y **2016** dos mil dieciséis.

Relativo al vehículo con placas de circulación XXXXXXXXXX:

- Las cédulas de notificación de infracción folios **121313367, 122333193, 12257813, 122534045, 162994875, 163170868, 163282259, 163833115, 164106675, 145889774, 164453332, 164535363, 165572386, 166037948, 168717377, 169399506, 169753733, 170331109, 171051835, 173747462, 175839046, 176326387, 176651571, 221602242, 223207251, 224066732, 226315292, 226480200, 231765727, 232541490, 232707186, 233476269, 201172691, 236650111, 236951022, 236953726, 237407920, 207723657, 26957398 y 269862440.**
- El cobro de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma por los periodos de los años **2011** dos mil once, **2012** dos mil doce, **2013** dos mil trece, **2014** dos mil catorce, **2015** dos mil quince y **2016** dos mil dieciséis.

Por encontrarse ajustadas a derecho y no ser contrarias a la moral, se admitieron las pruebas ofrecidas, teniéndose por desahogadas, las documentales identificadas, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, de su escrito inicial de demanda, en virtud de que la naturaleza de las mismas lo permitió.

Con las copias simples del escrito inicial de demanda y de los documentos anexos a la misma se ordenó correr traslado a las autoridades demandadas para que dentro del término de diez días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación produjeran contestación a la demanda, ofrecieran y exhibieran pruebas con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se les tendrían como ciertos los hechos que no fueran contestados salvo que por las pruebas rendidas o hechos notorios resultaren desvirtuados y se les declararía por perdido el derecho a rendir pruebas.

Por otro lado, se requirió a las autoridades demandadas descritas con antelación, para que al momento de contestar la demanda exhibieran copias certificadas de los actos combatidos, apercibidas que de no hacerlo así, se les aplicaría alguna medida de apremio prevista en el artículo 10 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; sin perjuicio de tener como ciertas las afirmaciones que la parte actora pretende acreditar con dichos documentos, salvo disposición en contrario como lo establece el artículo 293 del Código de procedimientos civiles del Estado, de aplicación supletoria.



También se habilitaron días y horas inhábiles, a efecto de que se practicaran las notificaciones que derivaran de la tramitación del presente juicio, por ser necesario para su debida substanciación.

3. Con fecha 25 veinticinco de noviembre de 2020 dos mil veinte, se tuvo al Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad y a la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública, quienes comparecieron en representación y sustitución de las autoridades demandadas, produciendo contestación a la demanda, por opuestas las excepciones y defensas que de sus escritos se desprendieron, se admitieron las pruebas ofrecidas, por encontrarse ajustadas a derecho y no ser contrarias a la moral, teniéndose por desahogadas, de la totalidad de las autoridades referidas, únicamente la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, en virtud de que la naturaleza de las mismas lo permitió.

En el mismo proveído, se dio cuenta que la diversa autoridad demandada - Secretaría del Transporte-, no produjo contestación a la demanda interpuesta en su contra, dentro del término que se otorgó en auto 6 seis de octubre de 2020 dos mil veinte; en tal virtud se le hizo efectivo el apercibimiento ahí contenido y se declaró la correspondiente **rebeldía**, teniéndole como ciertos los hechos que le fueron imputados por la parte actora de manera precisa, salvo que por las pruebas rendidas o hechos notorios resultaren desvirtuados, así mismo se le declaró por perdido el derecho a rendir pruebas.

Además, se tomó debida nota de las causales de improcedencia vertidas por los representantes de las autoridades demandadas.

Con las copias simples de los escritos de contestación de demanda y de los documentos anexos a las mismas se ordenó correr traslado a la parte actora para que quedara debidamente enterada de sus contenidos.

También, se advirtió que las autoridades demandadas, fueron omisas en dar cumplimiento al requerimiento formulado en actuación de fecha 6 seis de octubre de 2020 dos mil veinte, motivo por el cual se les hizo efectivo el apercibimiento ahí contenido teniéndoles como ciertos los hechos que la parte actora pretende acreditar con dichos documentos.

Finalmente, se determinó que las pruebas admitidas, se habían desahogado en su totalidad, además de que lo controvertido involucra cuestiones puramente de derecho, se otorgó a las partes un término común de tres días a fin de que formularan **alegatos**, apercibiéndoles que, en caso de no hacerlo así, se les tendría por perdido el derecho en ese

sentido y se turnarían los autos para que se dictara la sentencia definitiva que en derecho correspondiera, la cual hoy se pronuncia de conformidad a los siguientes:

## **C O N S I D E R A N D O S**

**I.** Este Tribunal es competente para conocer y resolver la presente controversia con base en lo dispuesto por el artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 3, 4, 5, 10 y demás relativos de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como los artículos 1, 2, 3, 4, 31, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 72, 73, 74, relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

**II.** La existencia de los actos administrativos impugnados se encuentra debidamente acreditada en actuaciones con las documentales que obran agregadas a fojas 24 a 31, a las que se les otorga valor probatorio pleno en los términos de los artículos 48<sup>1</sup>, 57<sup>2</sup> y 58<sup>3</sup> de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como en los diversos numerales 399<sup>4</sup> y 400<sup>5</sup> del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley Adjetiva de la Materia.

**III.** Según criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación, no se hace necesario transcribir los conceptos de impugnación que hiciera valer el accionante en su escrito inicia

I, ni la contestación realizada por las autoridades demandadas, toda vez que dicha omisión no deja en estado de indefensión a ninguna de las partes; se sustenta lo anterior por analogía y para mayor claridad se transcribe la siguiente Jurisprudencia:

---

<sup>1</sup> Artículo 48. *En los juicios a que se refiere esta ley será admisible toda clase de pruebas, excepto la confesional mediante absolución de posiciones, las que no tengan relación con los hechos controvertidos, las contrarias a la moral y al derecho; y las que no hayan sido ofrecidas ante la autoridad demandada en el procedimiento administrativo, salvo que en éste no se le hubiera dado oportunidad razonable de hacerlo.*

*Las pruebas supervenientes podrán presentarse antes de citación para sentencia. En este caso, la Sala ordenará dar vista a la contraparte para que en el término de cinco días exprese lo que a su derecho convenga, reservándose su admisión y valoración hasta la sentencia definitiva.*

<sup>2</sup> Artículo 57. *El ofrecimiento y desahogo de pruebas, salvo lo expresamente previsto en la presente ley, se regirá por las disposiciones relativas del Código de Procedimientos Civiles del Estado.*

<sup>3</sup> Artículo 58. *La valoración de las pruebas se hará conforme a las disposiciones relativas del Código de Procedimientos Civiles del Estado.*

<sup>4</sup> Artículo 399.- *Los instrumentos públicos hacen prueba plena, aunque se presenten sin citación del coligante, salvo siempre el derecho de éste para redargüirlos de falsedad y para pedir su cotejo con los protocolos y archivos. En caso de inconformidad con el protocolo o archivo, los instrumentos no tendrán valor probatorio en el punto en que existiere la inconformidad.*

<sup>5</sup> Artículo 400.- *Los instrumentos públicos no se perjudicarán en cuanto a su validez por las excepciones que se aleguen para destruir la acción que en ellos se funde; y no podrán objetarse sino con otros posteriores de la misma especie, salvo el caso de simulación en el que se podrá hacer uso de cualquier otro medio de prueba.*



**“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.** De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.” Novena Época. Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI. Mayo de 2010. Tesis: 2a./J.58/2010. Página: 830.

IV. Antes de entrar al estudio de los conceptos de nulidad realizados por la parte actora, en primer término y por ser de orden público se estudian las causales de improcedencia, promovidas por el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad y por el Director de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública, quienes comparecieron en representación de las autoridades demandadas, en su escrito de contestación a la demanda recepcionado por la Oficialía de Partes Común de este Tribunal el día 17 diecisiete y 18 dieciocho de noviembre de 2020 dos mil veinte, prevista por el artículo 29 fracción IX, en relación con el 30, fracción I<sup>6</sup> y con el artículo 1, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que literalmente establece:

<sup>6</sup> Artículo 30. Procede el sobreseimiento del juicio:

I. Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;

*“Artículo 29.- Es improcedente el juicio en materia administrativa, contra los actos:*

*IX. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley.”*

En cuanto al Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad, expone como causa de improcedencia y sobreseimiento, la prevista por el artículo 29 fracción IX, en relación con los diversos 30 fracción I y 3 fracción II, inciso a) de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en el sentido de que no le reviste el carácter de autoridad demanda al no haber ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar el acto impugnado.

Causa de improcedencia que es **infundada**.

Para arribar a lo anterior, se considera que conforme a lo establecido por los artículos 3, 6, 13 y 15 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, le corresponde intervenir en la regulación y administración del tránsito, los cuales, son antecedentes de los actos impugnados.

Refiere, el Director de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública, que el juicio de nulidad no es la vía idónea para combatir el pago del derecho de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma, por ser una disposición de orden público e interés social, emanada del Congreso, además de que dicha contribución fue consentida por el demandante al no haber interpuesto en tiempo y forma recurso o medio de defensa alguno, como lo es el amparo indirecto por su sola vigencia o impugnar dentro de los 15 quince días siguientes a la comisión del primer acto de aplicación.

La causal de improcedencia es **infundada**.

Lo anterior es así, en razón de que la parte actora exhibió el adeudo vehicular relativo al automotor con placas de circulación [REDACTED] y [REDACTED], expedidos por la Secretaría de la Hacienda Pública, para acreditar la existencia de los actos impugnados; es decir, los actos atribuidos a la citada Secretaría, para tal efecto se cita el texto del artículo 1, segundo párrafo, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, el cual establece lo siguiente:

*“Artículo 1. El juicio en materia administrativa tiene por objeto resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades del Estado, las*



*municipales y de los organismos descentralizados de aquellas, con los particulares. Igualmente, de las que surjan entre dos o más entidades públicas de las citadas en el presente artículo.*

*Procede el juicio en materia administrativa en contra de disposiciones normativas de carácter general siempre que no se trate de leyes emanadas del Congreso. **En estos casos la demanda deberá interponerse en contra del primer acto de aplicación**, ante las salas del Tribunal de lo Administrativo...”.*

En ese orden de ideas, como se advierte del numeral transcrito, el juicio en materia administrativa, resulta procedente, cuando se combatan normas generales, siempre y cuando no sean Leyes emanadas del Congreso y deberá interponerse en contra del primer acto de aplicación, siendo que la parte actora, precisó como actos administrativos impugnados, el refrendo anual de placas vehiculares de los años **2011** dos mil once, **2012** dos mil doce, **2013** dos mil trece, **2014** dos mil catorce, **2015** dos mil quince, **2016** dos mil dieciséis, **2017** dos mil diecisiete, **2018** dos mil dieciocho, **2019** dos mil diecinueve y **2020** dos mil veinte; contribución que se encuentra prevista en los artículos 24, fracción III y 23, fracción III, de las Leyes de Ingresos respectivas; misma que es una norma de carácter general y en el particular es procedente el juicio de nulidad contra dichos actos, ya que el actor con el adeudo vehicular, acredita estar en la hipótesis de aplicación, por lo que sitúa en el supuesto señalado en el presente párrafo.

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 72 de la normatividad invocada en el párrafo que antecede, se procede al examen de las causas de ilegalidad que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de las resoluciones combatidas y más benéfica para la parte actora, atento al citado dispositivo legal así como a la tesis que aquí se inserta:

**“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EN ATENCIÓN AL ORDEN QUE SEÑALA LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN, DEBEN ANALIZARSE EN PRIMER LUGAR AQUELLOS QUE LLEVEN A DECLARAR LA NULIDAD MÁS BENÉFICA PARA EL ACTOR. En el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se encuentra contenido el**

*principio de exhaustividad de las sentencias en materia fiscal, al imponer a las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la obligación de examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, iniciando por aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana, y después por los que se refieran a la omisión de requisitos formales o vicios del procedimiento, lo que se traduce en la obligación de analizar, en primer lugar, los motivos de nulidad que lleven a una declaratoria de nulidad más benéfica para el actor, y sólo en el evento de estimarlos infundados, se pronuncie sobre los conceptos de impugnación que lleven a una declaratoria de nulidad para efectos, bien sea de la llamada comúnmente "del tercer tipo", por versar sobre el ejercicio de facultades discrecionales o, en su caso, para otros efectos."(Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Abril 2007. Tesis: VIII.1o.86 A. Página: 1828.)*

En atención a los numerales y Jurisprudencia señalada, se procede al análisis de los conceptos de impugnación que vierte en su escrito inicial de demanda, mismos que refiere como PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y CUARTO, mediante los cuales, substancialmente señala que respecto a las cédulas de notificación de infracción impugnadas carecen de la debida fundamentación y motivación, así como que no le fueron debidamente notificadas, por lo que desconoce el contenido de las mismas, y por lo que considera deberá declararse la nulidad de las resoluciones impugnadas.

Sin que a lo anterior la autoridad demandada –Secretaría del Transporte-, haya realizado manifestaciones tendentes a desvirtuar lo aseverado por el accionante.

Al manifestarse a lo anterior el Director General Jurídico adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, quien comparece en representación de la diversa autoridad demandada –Secretaría de Seguridad-, en su escrito de contestación de demanda recibido por este Tribunal el 13 trece de noviembre de 2020 dos mil veinte, manifestó que los argumentos que vertió la demandante en vía de conceptos de impugnación, son inoperantes por insuficientes e ineficaces, ya que los actos administrativos de los cuales se duele, cumplen con todos y cada uno de los elementos y requisitos de validez que se comprenden en los artículos 12 y 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, por lo que considera deberá declararse la validez de los mismos.

Al manifestarse a lo anterior, la Directora de lo Contencioso de la Secretaría





de la Hacienda Pública, quien compareció en representación y sustitución la autoridad demandada -Secretaría de Hacienda Pública-, en su escrito de contestación de demanda recibido por este Tribunal el 17 diecisiete de noviembre de 2020 do mil veinte, refiere que la parte actora no dirige agravios directos en contra del derecho de refrendo, ni especifica en que sentido este le afectó su esfera jurídica.

En ese tenor, derivado de los argumentos establecidos en párrafos anteriores, se considera que le asiste la razón al accionante cuando refiere que las cédulas de notificación de infracción impugnadas, violentan las formalidades esenciales del procedimiento, ya que no le fueron notificadas, no obstante que la autoridad emisora se encuentra obligada a ello de conformidad a lo dispuesto por el artículo 377 , así como por la fracción III, del artículo 378 del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en los cuales se establece que en caso de que el conductor no se encuentre en el lugar del vehículo, el agente vial procederá a elaborar la cédula de notificación correspondiente y la dejará en un lugar visible y seguro del vehículo, con independencia de los motivos que hayan generado el levantamiento de la misma, así como aquella que sean detectadas a través de equipos o sistemas tecnológicos, se harán constar en la cédula de notificación de infracción, así como que la misma deberá ser notificada al propietario del vehículo dentro de los sesenta días naturales posteriores a su levantamiento, en el domicilio que aquél tenga registrado ante la Secretaría en materia fiscal en el Estado.

También se precisa en el dispositivo legal citado en último lugar, que en el caso de las notificaciones por correo certificado, si el domicilio se encuentra cerrado y nadie responde para la entrega del documento, se realizará una segunda visita por parte del servicio de correspondencia; no obstante lo anterior, si no es posible recabarse la firma del destinatario, se atenderá la diligencia con quien en su nombre lo reciba o si éstos no se encuentran en el domicilio, se levantará constancia de ello; es necesario precisar que la parte actora en su escrito inicial de demanda, manifestó desconocer el contenido del acto combatido, por lo que se requirió a las autoridades demandadas para que remitieran las copias certificadas, sin que al efecto en auto de fecha 25 veinticinco de noviembre de 2020 dos mil veinte, hubieran comparecido a cumplimentar dicho requerimiento, por lo que se les tuvieron como ciertos los hechos que el actor pretendía acreditar; quedando de manifiesto que se actualiza un estado de inseguridad jurídica e indefensión, al no haber sido legal y debidamente notificada, toda vez que constituye un derecho de los particulares y una garantía de seguridad jurídica frente a la actividad de la administración pública, por lo que se violentaron las formalidades esenciales del procedimiento, así como la garantía de legalidad y seguridad jurídica resguardadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que trae como consecuencia **declarar la nulidad** de las cédulas de notificación de infracción impugnadas.

**“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.** La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.”(Octava Época. Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI. Mayo de 1992. Tesis: P.LV/92. Página: 34.)

Por otro lado, de los argumentos expuestos en el sexto punto petitorio del escrito inicial de demanda, el cual solicita se declare la prescripción del acto combatido en virtud de haber transcurrido el término de 5 cinco años previsto por el artículo 90 del Código Fiscal del Estado de Jalisco, mismo que es substancialmente **fundado**.

En ese orden de ideas, es preciso señalar el contenido de los artículos 90, 91 y 94 del Código Fiscal del Estado de Jalisco, establece lo siguiente:

**“Artículo 90.-** Las obligaciones ante la Hacienda del Estado y los créditos a favor de éste, por impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, se extinguen por **prescripción en el término de cinco años**. En el mismo plazo se extingue también por prescripción, la obligación del fisco del Estado de devolver las cantidades pagadas indebidamente.



*La prescripción del crédito principal extingue simultáneamente los recargos, sanciones y gastos de ejecución.*

*La prescripción se inicia a partir de la fecha en que el crédito o el cumplimiento de la obligación pudieron ser legalmente exigidos y será reconocida o declarada por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, a petición de cualquier interesado”.*

*“Artículo 91. La prescripción **se interrumpe con cada gestión de cobro notificada** en los términos del artículo 94 de este Código, por el reconocimiento expreso o tácito del deudor, respecto de la existencia de la obligación de que se trate. De los requisitos señalados en este artículo deberá existir constancia por escrito”.*

*“Artículo 94. Las notificaciones de los citatorios, emplazamientos, solicitudes de informes o documentos y las de acuerdos o resoluciones administrativas que puedan ser recurridas, se harán personalmente.*

*Se notificará por edictos, cuando se ignore el domicilio de la persona a quien se deba notificar, o ésta se encuentre fuera del Estado, sin haber dejado representante legal acreditado ante las autoridades fiscales locales.*

*Se notificará por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no se encuentre después de iniciadas las facultades de comprobación o se oponga a la diligencia de notificación y en los demás casos que señalan las leyes fiscales y este Código.*

De los preceptos legales transcritos, se advierte, sustancialmente, que las contribuciones a favor del fisco, derivadas por, en lo que interesa créditos por impuestos y derechos, se extinguen por prescripción, en el término de cinco años, misma que se inicia, a partir de la fecha en que pudieron ser legalmente exigidos; asimismo, que ésta se interrumpe con cada gestión de cobro notificada.

Ahora, en el particular, la parte actora sostiene que el derecho de refrendo anual de placas vehiculares para los ejercicios fiscales 2011 dos mil once, 2012 dos mil doce, 2013 dos mil trece, 2014 dos mil catorce, 2015 dos mil quince y 2016 dos mil dieciséis,

prescribieron por el transcurso del tiempo, sin que la autoridad haya notificado algún procedimiento de ejecución que interrumpa dicho término.

Se estima le asiste la razón a la parte actora respecto a la **prescripción** aducida en relación al refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma para los ejercicios fiscales **2011** dos mil doce, **2012** dos mil doce, **2013** dos mil trece, **2014** dos mil catorce, **2015** dos mil quince y **2016** dos mil dieciséis, toda vez que la autoridad demanda no acredita haber notificado de manera personal al actor requerimiento de cobro alguno con el cual se interrumpa el término para que opere la prescripción solicitada por el demandante.

Bajo las argumentaciones vertidas, se considera innecesario entrar al estudio de los demás conceptos de anulación y pruebas aportadas al sumario que hacen valer las partes, porque su estudio sería innecesario al no influir en la variación del sentido de esta resolución, en términos del criterio Jurisprudencial que dice:

**“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ES INNECESARIO SU ESTUDIO, CUANDO LA DECLARACIÓN DE FIRMEZA DE UNA CONSIDERACIÓN AUTÓNOMA DE LA SENTENCIA RECLAMADA ES SUFICIENTE PARA REGIR SU SENTIDO.**

*Si el tribunal responsable, para sustentar el sentido de la resolución reclamada, expresó diversas consideraciones, las cuales resultan autónomas o independientes entre sí y suficientes cada una de ellas para regir su sentido, la ineficacia de los conceptos de violación tocantes a evidenciar la ilegalidad de alguna de tales consideraciones, hace innecesario el estudio de los restantes, pues su examen en nada variarían el sentido de la resolución reclamada, ya que basta que quede firme alguna para que dicha consideración sustente por sí sola el sentido del fallo.” (Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV. Mayo de 2007. Tesis: IV.2º.C.J/9. Página: 1743).*

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 31, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 47, 72, 73, 74, 75, 76, relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se concluye la presente controversia, de conformidad con los siguientes:



## R E S O L U T I V O S

**PRIMERO.** La parte actora [REDACTED], por conducto de su socio administrador [REDACTED], en el presente juicio, **desvirtuó** la legalidad de los actos administrativos impugnados.

**SEGUNDO.** Se **declara** la **prescripción** del cobro de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma por los periodos **2011** dos mil once, **2012** dos mil doce, **2013** dos mil trece, **2014** dos mil catorce, **2015** dos mil quince y **2016** dos mil dieciséis impuestas a los vehículos con placas de circulación [REDACTED] y [REDACTED], por los motivos y razonamientos analizados en el último considerando de la presente resolución.

**TERCERO.** Se **declara** la **nullidad** de las cédulas de notificación de infracción impugnadas relativas a las siguientes:

Respecto al vehículo con placas de circulación [REDACTED]:

- Las cédulas de notificación de infracción folios **78197900, 81242445, 85918311, 88378091, 93728289, 105816697, 113534729, 117540030, 130564469, 130564455 y 121949512.**

Relativo al vehículo con placas de circulación [REDACTED]:

- Las cédulas de notificación de infracción folios **121313367, 122333193, 12257813, 122534045, 162994875, 163170868, 163282259, 163833115, 164106675, 145889774, 164453332, 164535363, 165572386, 166037948, 168717377, 169399506, 169753733, 170331109, 171051835, 173747462, 175839046, 176326387, 176651571, 221602242, 223207251, 224066732, 226315292, 226480200, 231765727, 232541490, 232707186, 233476269, 201172691, 236650111, 236951022, 236953726, 237407920, 207723657, 26957398 y 269862440.**

Por los motivos y razonamientos analizados en el último considerando de la presente resolución.

**NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.**

Así lo resolvió el Magistrado JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL, Presidente de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco actuando ante la presencia del Secretario de Sala JOSÉ GUILLERMO VIZCARRA CASILLAS, quien autoriza y da fe.

**EL MAGISTRADO PRESIDENTE**

**JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL**

**EL SECRETARIO DE LA SALA**

**JOSÉ GUILLERMO VIZCARRA CASILLAS**

*JLGM/JGVC/efh.*

*“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y reservada que deberán observar los Sujetos Obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, representante legal, domicilio de la parte actora, etc.), información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente.”*